

# LA CRISIS POLITICA DE COLOMBIA 1994 - 1996

*Medófilo Medina*

*Historiador. Universidad Nacional de Colombia*

## **Resumen:**

Una aproximación a la historia actual de Colombia y su desenlace como crisis política, es el objetivo del presente artículo. Corrupción, narcotráfico quedan reseñadas en una síntesis de gran utilidad pedagógica y documental.

## **Palabras claves:**

Historia actual, Colombia, Crisis Política, Narcotráfico

oooooooooooo

## **Introducción**

Desde el 21 de junio de 1994 cuando se divulgó la noticia sobre los narcocassetes hasta estos finales de 1996 la excitación política no ha cedido. Las más diversas personas y personajes, grupos, y colectivos han aparecido, con más o menos fanfarria han ejecutado su número y han hecho mutis por el foro, bien para pasar a la penumbra o para tomar aire y volver al tablado con renovados bríos. A estas alturas el elefante de monseñor Rubiano quizá se encuentre haciendo estropicios en los jardines del palacio arzobispal. La huelga del doctor Holguín Zamorano no se llevó a cabo, pero él con prudencia paró su lengua. Las señoras de la noventa y dos fastidiadas por el sol bogotano buscaron sombra fresca. Los estudiantes, aquellos que tanto proyectiles verbales lanzaron contra las increíbles espaldas del Presidente Samper, seguramente han encontrado objetivos más puntuales de protesta, que no impliquen una permanente movilización.

A punta de balas y promesas, y aquí las cosas no se presentan a una risueña narrativa, las marchas campesinas y las airadas protestas ciudadanas contra el alza de las tarifas de los servicios públicos han sido reprimidas o aplacadas.

Bajo la fluida corriente de los hechos, hay unas tendencias que se consolidan. Es en este nivel menos superficial en el cual cabe invertir el mayor esfuerzo de análisis. La referencia cronológica inmediata la constituye los 28 meses largos del gobierno actual. Sin embargo es preciso ubicar ese breve período en el contexto de la segunda mitad del siglo XX y en particular en el del último tercio. Los comentarios que vienen se articularán alrededor de los siguientes enunciados: primero: narcotráfico, dependencia e intervención norteamericana. Segundo: clase política, oposición, fiscalía; tercero: actores corporativos, protesta social y cuestión militar. El anterior temario no involucra todos los factores de la crisis, pero sí los más relevantes.

### 1.- **Narcotráfico, dependencia e intervención norteamericana**

Un hecho elemental que es preciso no perder de vista y que ha sido destacado en diversos análisis, es el de la inducción externa de la crisis. Para despegar los equívocos que pudieran desprenderse de esta afirmación es preciso adelantar que en modo alguno se considera la crisis como algo artificial.

Ella está reflejando problemas fundamentales de la situación del país que han tenido una larga maduración. El ritmo de la crisis en buena parte ha sido determinado por los funcionarios norteamericanos relacionados con el problema de la droga y por el embajador Myles Frechette. Ellos han podido sin interrupción sacar cartas nuevas. Pasados tres meses del escándalo desatado por los narcocassetes y cuando éste amainaba, el 29 de septiembre de 1994 se conocieron las declaraciones de Joseph Toft. El superagente recogió los lugares comunes sobre Colombia como una narcodemocracia, quiso además adelantarse a ciertos desarrollos posibles al calificar de farsa el esperado sometimiento a la Justicia de los capos del Cartel de Cali. La gravedad de las declaraciones del hasta entonces discreto funcionario radicaban tanto en la novedad de sus revelaciones como la jerarquía de quien las formulaba. Durante seis años había sido el Jefe de la DEA en Colombia (Semana, 1994).

A comienzos de 1995, el embajador hizo saber en qué vena recibía el año. En un discurso ante empresarios norteamericanos señaló refiriéndose a

la certificación: "Va a ser muy difícil este año, pues en Washington tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa hay quienes creen que la administración Samper no se ha desempeñado tan bien como había podido" (Semana, 1995)

En marzo se produjo la certificación por razones de interés nacional, es decir condicionada. El senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se encargó de puntualizar qué implicaba la condicionalidad. Aunque el muy anunciado debate en el congreso norteamericano que tuvo lugar el 4 de abril de 1995, terminó en fracaso, al día siguiente Helms presentó un proyecto de Ley en que se le fijaban a Colombia imposibles metas, las cuales debían cumplir en los próximos nueve meses.

La descertificación de marzo de 1996 constituyó un nuevo hito de la ofensiva gringa. La medida no se agotaba con la toma de la decisión. Su eficacia descansaba en mantener como amenaza permanente la posibilidad de aplicación de sanciones económicas si la guerra contra el narcotráfico no se atenía a los términos en que el gobierno de los Estados Unidos estimaba que debía realizarse. Esta descertificación se produjo en un momento cuando el gobierno colombiano podía mostrar importantes victorias en la persecución a los narcos y en la destrucción de cultivos de coca.

El siguiente punto del programa de asfixia al gobierno colombiano lo constituyó la cancelación de la visa a Samper. En este caso el ataque se planteaba en el plano simbólico. Se notificaba que ciertos tratamientos infamantes no se reservaban sólo a personajes como el panameño Noriega, sino que también se podían aplicar a presidentes "respetables", constitucionalmente elegidos, y cuyos apellidos no son simplemente una parte del nombre sino códigos de "las estirpes", para usar los términos del expresidente Gaviria.

A despecho de los voceros de la variopinta cruzada moral en la cual se ha querido aprisionar la crisis política por algunos sectores, parece muy claro que esta no se suscitó porque se hubiera colmado la paciencia nacional con la corrupción y la penetración de los dineros del narco en la política. Esa circunstancia ha jugado un papel importante en la valoración insuficiente de la gravedad de la actual situación por parte del ciudadano medio. La necesidad de un movimiento por el contenido ético de la política y por la conquista de definidos códigos morales en la administración pública no avanzará mucho si se la coloca bajo la égida de la cuestionada moral de los Estados Unidos. Al contrario una causa definitivamente justa e inaplazable se colmará de ambigüedades y confusión.

Durante la crisis se ha escuchado de manera insistente la pregunta sobre las razones que llevaron a Estados Unidos al endurecimiento de su

posición cuando la penetración de los dineros calientes en la política era conocida desde hace tiempo. La circunstancia personal del presidente Samper aporta elementos entre los cuales alguna significación tiene la proposición del dirigente gremial de los años setenta sobre la legalización de la marihuana.

Si bien ante la satanización de la coca y de la heroína, la marihuana es objeto de un tratamiento cada vez más benigno en los Estados Unidos la idea de la legalización de las drogas es algo que despierta una incontentible irritación en los funcionarios norteamericanos. Recuerdese la áspera reacción de la fiscal Janet Reno contra la conferencia del entonces fiscal colombiano Gustavo de Greiff sobre el tema, dictada el 16 de noviembre de 1993 en Baltimore.

Pero más importante que los ingredientes individuales ha sido el cambio del lugar que el problema del narcotráfico ha tenido en el cuadro de prioridades de la política exterior norteamericana. Este hecho ha sido adoptado como premisa en el análisis de quienes se ocupan de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Basta recordar algunos hitos al respecto. En 1982 el Presidente Reagan señaló que "la guerra contra las drogas era objetivo prioritario de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos." En septiembre de 1989 el presidente George Bush relanzó con mayor contundencia que su antecesor la guerra contra las drogas. El año tiene importancia. En efecto como anota el historiador Eric Hobsbawm "...es indudable que en los años finales de la década de 1980 y en los primeros de la de 1990 terminó una época de la historia del mundo para comenzar otra nueva" (Hobsbaw, Eric. 1995:15).

Hasta 1990 llegó la guerra fría en la medida en que ésta se basaba en la existencia de un mundo bipolar. Los fundamentos de la geopolítica establecidos en Yalta y Teheran se hundieron irremisiblemente. En esa nueva encrucijada histórica en la visión oficial de los EE.UU., el lugar del "imperio del mal" lo ocuparon las redes del narcotráfico. Si antes "la amenaza comunista" era el punto focal de la política internacional "la amenaza del narcotráfico" se proyectó como el nuevo parámetro de esa política, con mayor fuerza en lo que respecta a Latinoamérica. En virtud de ese cambio de enfoque se produce decisiones operativas que tienen notable repercusión en la región. Por ejemplo, los 8.000 hombres de la base aérea Howard de Panamá habían tenido como objetivo fundamental a las guerrillas de izquierda. Ahora el comando sur en su mira tiene al narcotráfico. Su jefe el general Barry R. Mc Cafferey había declarado antes de ser promovido a su nuevo cargo como zar de la droga: "Los narcóticos son un problema de la seguridad nacional" un destacado titular de la edición del 15 de febrero de 1995 del **Washington Post** señalaba:

"Tropas de E.U. en Panamá cambian de blanco de los marxistas a los narcotraficantes de droga".

Un factor interesante para el análisis son las actitudes y comportamiento de los dirigentes políticos, gremiales, de los directores de los grandes diarios, de los columnistas y directores de noticieros. Frente a cada uno de los registros que durante la crisis tocaron los funcionarios norteamericanos la reacción fue de temor y desconcierto. Antes que valoraciones políticas sobre las diversas acciones puestas en marcha por los Estados Unidos para profundizar la crisis colombiana, los sectores mencionados apenas estuvieron en condiciones de emitir señales de abatimiento e incluso de pánico. Las exigencias de renuncia del Presidente por parte de los empresarios coincidieron con algún viraje o carta nueva de los funcionarios de Clinton. La escogencia de la fecha de la declaración de Botero, la de el 23 de enero de 1996, estuvo en relación con la calculada eficacia de su sincronización con el temor creciente a la descertificación.

La dependencia es un fenómeno objetivo, tiene unas estructuras identificables, genera políticas y hechos concretos. Sin embargo el "imaginario" de la dependencia puede reflejar de manera distorsionada esas realidades. No solo existe una dependencia objetiva sino una mentalidad dependiente que influye de manera importante sobre los alcances y modalidades que toma la primera. Es pertinente contrastar la posición de los dirigentes políticos colombianos y de "los forjadores de opinión" con la manera como similares problemas se encararon por sectores dirigentes de otros países. "Desde hace nueve años, señalaba el lamentado Tom Quinn en un artículo de marzo de 1996 a propósito de la descertificación, la cancellería mejicana, cada febrero en vísperas del anuncio de la recomendación certificadora del presidente gringo, siempre manda el mismo mensaje a Washington: México no reconoce el proceso de certificación, por considerarlo intervencionista en los asuntos internos de los estados" (Quinn, Tom. 1996:24). Quinn, se burlaba en su desenfadado estilo, de la posibilidad de sanciones económicas a Colombia a raíz de la descertificación. En contraste, la mayoría de sus colegas colombianos se preguntaban apenas por la fecha en que tales sanciones entrarían en vigencia. Tiene utilidad terapéutica leer el escritorio de Quinn ahora que han empezado los ejercicios escatológicos a propósito de la decisión de marzo de 1997.

No faltaron los episodios conmovedores. El 13 de julio de 1996 dos días después de la cancelación de la visa al Presidente Samper don Hernando Santos, quien había pedido a los periodistas hacia poco tiempo abstenerse de "comer presidente", en escogidas palabras paternales le aconsejó pensar en la

“voluntad de abandonar el poder”. El Director de El Tiempo sabe bien qué lugar ocupan las distintas fidelidades en la escala de las lealtades políticas de los de su casa.

Desde ese punto de vista sorprendieron las declaraciones del embajador colombiano en los Estados Unidos, Carlos Lleras de la Fuente. “Estados Unidos tiene complejo de vampiro” “Lo que le gustan son los cadáveres”, señaló en una conferencia dictada en la primera semana de febrero de 1995. Fue su reacción contra el malestar que Washington había manifestado por los acuerdos entre representantes del gobierno colombiano y los campesinos cultivadores de coca del Guaviare que habían lanzado a un movimiento en el mes de diciembre de 1994. Entre los compromisos adquiridos por las autoridades colombianas figuró el de la erradicación a mano y no mediante fumigación aérea, de las siembras de menos de tres hectáreas.

El presidente Samper y el Ministro Serpa se han permitido expresiones críticas, han lanzado sus dardos contra algunos de los funcionarios norteamericanos. Se trata de palabras de rebeldía para distracción de la galería. Sin embargo en vísperas de la culminación del azaroso Siglo XX las astucias de corto vuelo no pueden sustituir la elaboración y adopción de estrategias políticas fundamentales. Las copias del ingenio municipal pueden ayudar en ciertos episodios de la políticas del día pero se muestran en extremo ineficaces para derivar de ellas la metodología para afrontar los grandes problemas nacionales entre los cuales está en lugar privilegiado el del narcotráfico.

Desde la bonanza marimbera el país lleva ya cerca de tres decenios de improvisación en la política con respecto al narcotráfico. Son bien conocidos en este campo el utilitarismo en la economía, los prejuicios de exclusión social, el pragmatismo amoral en el uso de la infraestructura militar de los carteles en la guerra contra la subversión y la izquierda, la convivencia con “narcos civilizados” para aplastar el narcoterrorismo. La mezcla de ambigüedad, vacilación y corrupción acumuló un conjunto de problemas que aparecen en la crisis presente como peligroso resumen de tres décadas.

El tira y afloje del Estado con respecto a la extradición ha reflejado el mismo ritmo espasmódico y contradictorio de la política general contra el narcotráfico. Entre 1979 cuando fue establecido mediante un tratado con los Estados Unidos y junio de 1991 cuando fue eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente se adoptó tres veces y otras tantas se eliminó.

A propósito de las discusiones en el Congreso no huelga preguntarse: ¿llegó la hora del restablecimiento de la extradición sin condiciones ni reservas?

La discusión está lejos de agotarse, la oposición a la extradición no puede colocarse como función exclusiva del soborno.

Frente a la discusión actual sobre la extradición es preciso hacer memoria de la ola terrorista de 1989 - 1991. Habría que reflexionar sobre la impresionante respuesta de una opinión pública llevada a los umbrales de la histeria por la ola terrorista de 1989 - 1991. En diciembre de 1990 un 81.5% de los encuestados por la Gallup se declaraba dispuesto a aceptar que un extradi-table fuera nombrado ministro del gabinete si eso contribuía a que volviese la paz”. Esta mención puede ser despachada a lo Gómez Buendía, con una frase definitiva: “Si un estado cede al terrorismo deja de ser estado” Quizá en la práctica esta sentencia tenga tanta significación como el subtítulo de aquella columna en la que fue consignada: “Nadie piensa en Colombia” (El Tiempo, 1996a: 54). El sentido de la responsabilidad debería conducir a no correr el riesgo de llevar a la opinión pública a tales estados de exasperación y desmoralización.

A punto de remontar el siglo XX para el país el narcotráfico aparece como un problema crucial, está en el lugar en el cual se cruzan los diversos caminos y sobre el cual se proyectan todas las contradicciones. Tienen razón el politólogo Juan Gabriel Tokatlián cuando plantea que el problema de los narcos debe ser objeto de un debate nacional en el que quiere ver comprometidos a los que él llama: “los poderes fácticos de la sociedad: al establecimiento político, a la dirigencia empresarial y al estamento militar” (El Tiempo, 1996b: 10A). No se puede coincidir sin embargo con la lógica que parece inspirar las reflexiones de Tokatlián o sea la sencilla ecuación de que la aceptación de la condición transnacional del narcotráfico es igual a la adopción sin reservas del punto de vista de los Estados Unidos al respecto. Aún aceptando que los procesos de globalización dan lugar a un sistema de “soberanías porosas” para los estados nacionales, estos pueden jugar dentro de un marco de opciones.

En el caso colombiano el campo de maniobra se encuentra en la actualidad severamente limitado por la ilegitimidad de que están rodeados tanto instancias decisivas del Estado como el grueso de la clase política. Pero también las limitaciones provienen de la ya señalada mentalidad dependiente de la mayor parte de las élites colombianas que dificulta a los sectores dirigentes del país plantearse con serenidad y sin complejos, alternativas a la política exterior colombiana.

A lo largo de la crisis que ha vivido el país desde 1994 la llamada clase política ha estado acorralada, al menos en apariencia. El proceso 8.000 puso

en evidencia la corrupción que atraviesa el mundo de la política colombiana sin que desde la sociedad o los medios de comunicación se desprendieran signos de solidaridad con los políticos puestos en la picota pública.

Las señales fueron más bien las del repudio al Congreso y de fatiga con el sistema de relaciones y de formas de comunicación que se ha denominado política.

En el pasado, se precipitaron crisis que en la medida en que tuvieron como referente al Presidente de la República permiten traerlas a cuento a propósito de la coyuntura actual. En los ya lejanos años veinte cayó el presidente Marco Fidel Suárez en virtud de una acusación que vista en sí misma mueve a la compasión con el acusado. La denuncia contra el presidente presentada en el Congreso por el representante Laureano Gómez el 21 de octubre de 1921 condujo a un rápido resultado. El 11 de noviembre asumió la presidencia el diputado Jorge Holguín luego de la renuncia del titular. El conflicto se había resuelto en veinte días.

Es cierto que la crisis que acompañó la segunda presidencia de López Pumarejo 1942-1945 fue bastante prolongada. Sin embargo se resolvió también por procedimientos políticos mediante la designación en el Congreso de Alberto Lleras Camargo luego de la renuncia irrevocable de López.

Sin entrar en la valoración del sentido en que se resolvieron esas crisis y sin abordar la discusión sobre si los resultados políticos favorecieron o no la democratización del país, se advierte un fenómeno significativo: en ambos casos la crisis no se judicializó y se procesó en la esfera política. (Uprimny, Rodrigo. 1996: 99-127). En dónde radica la razón de esos desarrollos? La respuesta parece ser muy sencilla. En las situaciones históricas aludidas existían fuerzas políticas de oposición que alentaban propuestas alternativas a las encarnadas por el presidente de la República. Existía oposición y no simplemente figuras individuales que hacían oposición.

En el momento actual no es posible identificar entre las fuerzas con opción electoral de poder programas claramente diferenciados. Es cierto que el ministro del interior, Horacio Serpa, reclama para el gobierno las banderas de la reforma social y de reivindicación nacional. Aunque esa agitación produzca dividendos para el gobierno no se la puede tomar como una opción seria de superación de los grandes problemas que hoy enfrenta el país. Así, un hecho crucial que la crisis política pone de relieve es que Colombia culmina el siglo XX con un sistema político que carece de oposición. Eso permite comprender, al menos en parte, las paradojas que han rodeado la actuación de la fiscalía. Su acción investigativa y de acusación, en la práctica ha remplazado

la función de una fuerza política que no existe. Allí radican no pocas de las expectativas que han despertado el fiscal general pero también se anidan los límites de su papel. No hay espacio para presentar el análisis sobre la ausencia de la oposición. Parece sin embargo pertinente señalar que el narcotráfico contribuyó en no despreciable medida a ese resultado.

Atendiendo a las circunstancias puramente personales no resulta especulativo señalar que fiscal y vicefiscal representa la historia de una frustración política que en modo alguno podría asociarse a las respetables trayectorias biográficas de los dos funcionarios sino a la derrota de una disidencia con programa propio y al fracaso de una izquierda radical de estirpe civilista.

Al señalar el vacío de una fuerza de oposición y sin tener en cuenta el ajeteo electoral de las precandidaturas presidenciales, no se oculta la existencia de diversas confrontaciones que vienen de atrás y que la crisis ha sacado a flote. Así por ejemplo, cómo no ver en los promotores de la Agenda 96 el reflejo de ese conflicto entre técnicos y políticos que se perfiló de manera clara desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo? (1966-1970). Esa burocracia en cuyas manos ha estado en buena parte la política económica y la intermediación con los organismos transnacionales, así como los sectores sociales que se sienten interpretados por ella, no han podido en su enfrentamiento con la clase política tradicional dar vida a una fuerza con perfiles organizativos y programáticos propios (Palacios, Marcos: 1995: 244-248).

El galanismo que recogió aunque de manera no muy consecuente las aspiraciones de modernización de las costumbres políticas bajo enunciados anticlientelistas deja ver sus huellas entre algunos de los sectores que descifran la crisis políticas en clave moral. Pero en este caso tampoco se advierte una formación política que como tal, hubiese sobrevivido a la inmolación del líder. Esos fenómenos han contribuido a que los conflictos políticos no se asuman de manera clara y que la crisis tome por tiempos los rodeos de una comedia de las equivocaciones. Por otro lado esos esbozos de oposición no tienen nada que decirles a sectores muy grandes de la población excluidos del acceso a bienes y servicios.

Pero lo más sorprendente y contradictorio de todo consiste en que las tendencias que parecen estar ganando son aquellas fuerzas políticas tradicionales, aquellos sectores que a mediados de los años setenta la opinión identificó como el turbolopismo. El hecho de que se haya producido un consenso muy amplio en torno a la figura de Lemos Simons constituye la evidencia de una tal involución. Para la mayoría de los sectores dirigentes del

país la máxima recomendación de Lemus radicó en su fama de hombre autoritario, de personaje incondicional hacia el Departamento de Estado. Para los congresistas el recuerdo de la oposición a la disolución de las cámaras en 1991 debió resultar conmovedor a la hora del voto por el vicepresidente. La solidaridad entre el presidente y el congreso es la manifestación de la fuerza de un estilo político que si bien caduco no tiene a la vista carta de recambio.

### 3.- Intereses corporativos y protesta social

Ante la ausencia de una fuerza política de oposición cabría esperar que ciertos sectores de la sociedad civil hubieran asumido un destacado papel político. Por un lado están los gremios y por otro los movimientos sociales, en particular el sindicalismo. En el caso de los primeros, a lo largo de la crisis han tenido un comportamiento errático. La radicalización inicial de algunos chocó con el ánimo conciliador de otros. En diciembre de 1995 los jefes de los grupos económicos ensayaban una luna de miel con Samper, a finales de enero de 1996 el Consejo Gremial se endureció y pidió la renuncia temporal del presidente. La actitud de los grupos económicos no ha sido unánime. Pasada la desertificación los dirigentes gremiales perdieron perfil. Las cosas cambiarán a medida que se acerque el primero de marzo de 1997. En general los dirigentes de la producción, la banca y los negocios no pueden ir más allá de donde se lo permiten sus cálculos a partir de intereses corporativos. No habría en cierto modo que pedir algo distinto.

Los sindicatos no estuvieron en mejores condiciones para actuar en la crisis, que su contraparte histórica. Debilitados por la guerra sucia, la reforma laboral y la evolución de las ideologías, no pudieron ofrecer una posición unificada. Por el contrario unos sindicatos apoyaron al gobierno, otros pidieron la renuncia de Samper. El nombramiento de Orlando Obregón, presidente de la CUT como Ministro de Trabajo en diciembre de 1995 incrementó la debilidad política del sindicalismo. Sobre ese panorama, las organizaciones que estuvieron en condiciones de hacerlo, obraron con el criterio pragmático de obtener ventajas corporativas aprovechando la debilidad del gobierno.

De ese modo alcanzaron algunos éxitos, los trabajadores del sector eléctrico, de la Caja Agraria, de telecom. De manera global el sindicalismo en medio de la crisis siguió perdiendo terreno.

Por fuera de los movimientos sociales más orgánicos la movilización campesina se proyectó de manera importante sobre la crisis. Pero no fueron

únicamente los campesinos cultivadores de la coca los que marcharon. Entre los primeros que participaron estuvieron los cafeteros del norte del Tolima. Más recientemente los ciudadanos de Faca protagonizaron manifestaciones violentas contra las altas tarifas de los servicios públicos. Se advierte entonces la presencia de tres tipos de movimiento que en cierto modo responden a lógicas diferentes: los cultivadores de coca, los movimientos que se han llamado cívicos y los pequeños caficultores. Esa conjunción habría que tenerla en cuenta para ver los alcances de afirmaciones como la lanzada por el General Harol Bedoya Pizarro en relación con las marchas del Caquetá: "Hay que arrancar las matas y después se mira que se hace con los campesinos" (El Tiempo. 1996c: 16A) Sin embargo esa protesta de la Colombia rural transcurre cuando el país está culminando un proceso cuyo impacto no se ha valorado en sus justas dimensiones: la pérdida de la hegemonía del café en el sector externo y en el conjunto de la economía. Mientras que para los años setenta el café participaba con el 60% de las exportaciones, entre 1990 y 1994 al café en promedio solo correspondió el 20% del total de las exportaciones. El agravante consiste en que la economía cafetera, que moldeó la personalidad económica de la nación, ha sido intensiva en mano de obra, de alguna manera la coca también lo es. A ese nivel, de la esperada bonanza de los hidrocarburos no llegarán las soluciones.

La crisis de la agricultura, catalizada por la apertura económica, ensombrece aún más el panorama social.

Después de un relativo repliegue de las guerrillas, las ofensiva reciente y la reedición de la campaña por el fortalecimiento militar de las Fuerzas Armadas, y por el incremento del presupuesto han desplazado los elementos políticos en favor de la guerra. Esta se impone con su inexorable lógica reduccionista: la lucha cruenta de los buenos contra los malos. La ineficacia militar que el Estado ha mostrado en la ya larga guerra contra la subversión promete un despliegue que en proporciones inmediata será la del severo agravamiento de la situación de los derechos humanos. En relación con el país en general esa promoción de la guerra implicará que la recortada democracia colombiana estará en la sala de cuidados intensivos en los próximos años.

A la luz de tan alarmantes conjeturas los discursos de los precandidatos presidenciales en la pasada Asamblea Nacional de ANIF sobrecogen por el tono marcial de los oradores y enristecen por la ausencia de propuestas en materia económica y social.

Ante la profundidad de los problemas que el país enfrenta los procesos de internacionalización y globalización que no representan una opción sino

que constituye una insoslayable realidad, ofrecen posibilidades aún inexploradas de solución.

En efecto el narcotráfico, la guerrilla, la respuesta a lo planteado por las marchas campesinas no podrá resolverse sin una activa y convenida participación internacional. Pero para que esta no venga en forma de oprobiosa imposición es necesario un mínimo acuerdo interno que involucre aspectos económicos y sociales, que provea bases coherentes de una política a largo plazo sobre el narcotráfico y los problemas de la paz y la guerra, que permita la adopción de un enfoque en la política internacional del país. Ese consenso debe incluir la identificación de fuentes y maneras de obtención de los recursos fiscales que ese propósito nacional demandaría. Un esfuerzo en esa dirección acercaría a Colombia en estos finales del milenio a la conquista de una de esas conocidas definiciones mínimas de democracia cuando la gente decide que es preferible contar cabezas que cortarlas.

Santafé de Bogotá, 30 de octubre de 1996

#### Referencias

- Hobsbawn, Eric; 1995. Historia del Siglo XX. Barcelona, Crítica, 1995.
- Palacios, Marcos; 1995. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Santafé de Bogotá: Editorial Norma, 1995.
- Quinn, Tom; 1994. "Temores y mitos de una política estadounidense: ¿Quién certifica a quien?"; CREDECIAL, Santafé de Bogotá, marzo de 1996, pág. 24
- Semana, 1995. Santafé de Bogotá, Febrero 14-21 de 1995.
- Semana, 1996. Santafé de Bogotá, Octubre 4-11 de 1996
- El Tiempo, 1996a. 2 de septiembre de 1996, pág. 54.
- El Tiempo, 1996b. 29 de septiembre de 1996, pág. 10A.
- El Tiempo, 1996c. 16 de agosto de 1996, Pág. 16A.
- Uprimny, Rodrigo; 1996. "Jueces, narcos y políticos: la judicialización de la crisis política" en Francisco Leal Buitrago, editor, Tras las huellas de la crisis política, Santafé de Bogotá: Tercer Mundo, FESCOL, IEPRI, 1996, pág. 99-127.

---

#### Abstract:

This paper contains an approximation to Colombian actual history and its outcome as political crisis. Corruption and narcotrafic are described in a usefull pedagogical and documental synthesis.